21

Fecha de presentación: abril, 2024
Fecha de aceptación: septiembre, 2024
Fecha de publicación: octubre, 2024

ESTUDIO

DE LA EXTINCIÓN DE DERECHOS EN EL COBRO COERCITIVO: ANÁLISIS JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO

STUDY OF THE EXTINCTION OF RIGHTS IN COERCIVE COLLECTION: LEGAL AND ADMINISTRATIVE ANALYSIS

José Fabián Molina Mora ^{1*}

E-mail: docentetp43@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2653-2721>

Marcela Anarcaly Zambrano Olvera ¹

E-mail: uq.cjuridico@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5775-0724>

Manaces Esaud Gaspar Santos ¹

E-mail: uq.manacesgaspar@uniandes.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4929-4495>

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Quevedo. Ecuador.

*Autor para correspondencia

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Molina Mora, J. F., Zambrano Olvera, M. A., & Gaspar Santos, M. E. (2024). Estudio de la extinción de derechos en el cobro coercitivo: análisis jurídico y administrativo. *Universidad y Sociedad*, 16(S1), 171-177.

RESUMEN

El estudio evaluó la influencia de la caducidad y la prescripción en el procedimiento de ejecución coactiva, necesarios para garantizar la seguridad jurídica y evitar la perpetuidad de los procedimientos. Se empleó una metodología cualitativa, analizando información relevante sobre la coactiva, caducidad y prescripción en el ámbito de la administración pública, así como principios legales y normas aplicables. Se encontró que la caducidad actúa automáticamente, extinguiendo derechos por el simple transcurso del tiempo, mientras que la prescripción requiere ser alegada y se basa en la inactividad del titular del derecho. Ambos conceptos limitan el ejercicio arbitrario del poder administrativo, protegiendo los derechos de los ciudadanos y promoviendo la eficiencia administrativa. Los resultados destacaron que la caducidad resulta en la baja del título de crédito si no se inicia la ejecución dentro del plazo establecido, protegiendo a los ciudadanos de acciones administrativas prolongadas. La prescripción, por otro lado, impide que la administración ejerza acciones de cobro después de largos períodos de inactividad, asegurando que las deudas no permanezcan indefinidamente. La investigación subrayó la importancia de estas figuras jurídicas para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica. La adecuada aplicación de la caducidad y la prescripción es fundamental para la eficacia y eficiencia de la administración pública, protegiendo los derechos de los ciudadanos y asegurando el respeto al debido proceso. Se recomendó fortalecer la capacitación de los funcionarios públicos y revisar la normativa vigente para armonizar y unificar los plazos y procedimientos aplicables, evitando inseguridad jurídica y arbitrariedad.

Palabras clave: Procedimiento de sustanciación, Ejercicio de cobro, Estado de abandono, Administración pública.

ABSTRACT

The study evaluated the influence of expiration and prescription on the coercive collection procedure, necessary to guarantee legal certainty and prevent the perpetuity of procedures. A qualitative methodology was employed, analyzing relevant information on coercive collection, expiration, and prescription in the context of public administration, as well as applicable legal principles and norms. It was found that expiration acts automatically, extinguishing rights by the mere passage of time, while prescription needs to be claimed and is based on the inactivity of the right holder. Both concepts limit the arbitrary exercise of administrative power, protecting citizens' rights and promoting administrative efficiency. The results highlighted that expiration results in the invalidation of the credit title if the execution is not initiated within the established period, protecting citizens from prolonged administrative actions. Prescription, on the other hand, prevents the administration from exercising collection actions after long periods of inactivity, ensuring that debts do not remain

indefinitely. The research emphasized the importance of these legal figures to guarantee due process and legal certainty. The proper application of expiration and prescription is fundamental for the effectiveness and efficiency of public administration, protecting citizens' rights and ensuring respect for due process. It was recommended to strengthen the training of public officials and review the current regulations to harmonize and unify applicable deadlines and procedures, avoiding legal uncertainty and arbitrariness.

Keywords: Substantiation procedure, Collection exercise, State of abandonment, Public administration.

INTRODUCCIÓN

La caducidad y la prescripción son figuras jurídicas esenciales que garantizan la seguridad jurídica y el debido proceso. Evitando la perpetuidad de los procedimientos y asegurando que los derechos y obligaciones sean ejercidos dentro de plazos específicos. La importancia de estas figuras radica en su capacidad para limitar el ejercicio arbitrario del poder por parte de la Administración Pública, protegiendo así los derechos de los ciudadanos (Mejía, 2023). En primer lugar, se debe comprender el origen y la naturaleza del procedimiento de ejecución coactiva, que es una acción de cobro netamente administrativa. Este procedimiento puede ser cuestionado mediante control de legalidad por la justicia ordinaria, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador.

La ejecución coactiva se estructura en dos partes: el requerimiento de pago voluntario, que implica la emisión de un título de crédito, y la ejecución coactiva propiamente dicha, que se inicia una vez vencido el plazo para cualquier objeción al título de crédito emitido (Jordá, 2019). Además, es fundamental analizar los procedimientos específicos aplicados en estos escenarios jurídicos para determinar en qué contextos se permite o no la aplicación de la caducidad o prescripción. Desde la promulgación del Código Orgánico Administrativo en 2017, estas normativas regulan detalladamente estos procesos, asegurando que las acciones administrativas se realicen dentro de los límites legales establecidos.

El estudio también aborda la complejidad y los desafíos de la jurisdicción coactiva, destacando la necesidad de evitar errores y omisiones en su aplicación. Se busca proporcionar una guía clara y precisa para la ejecución adecuada de la jurisdicción coactiva, garantizando el respeto al debido proceso y la seguridad jurídica. La Administración Pública debe actuar dentro del marco legal y conforme a los principios de legalidad y no arbitrariedad, asegurando que sus acciones estén debidamente

fundamentadas y justifiquen su intervención en el cobro de obligaciones.

El objetivo general de esta investigación es evaluar cómo la caducidad y la prescripción afectan la ejecución coactiva y cómo estas figuras pueden prevenir la arbitrariedad en la actuación de la Administración Pública.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo, la metodología a emplearse es en primera instancia, un enfoque netamente cualitativo, debido a que se utilizarán métodos de análisis de información, analítico sintético, con lo cual se revisa toda la información existente sobre coactiva, caducidad y prescripción dentro del ámbito de la administración pública, así como los principios que la rigen. y se generan las síntesis de cada uno de los análisis, además, se analizan los cuerpos legales pertinentes como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil y otros documentos relacionados con la administración pública.

Entre los tipos de investigación tales como la bibliográfica documental, debido a que se revisarán todos los fundamentos teóricos con relación al tema a tratarse, analizando la información y comparándola con la ya existente sobre el tema, adicional se apoya en una investigación descriptiva – explicativa (Flores et al., 2013) con la finalidad de explicar los hechos que conllevan estos procesos de coactiva, caducidad y prescripción dentro del ámbito de la administración pública.

La investigación descriptiva y explicativa, permitió también realizar un detalle sobre el contenido de la norma en cuanto a los principios de juridicidad, legalidad y tipicidad, y su relación con el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica frente al ejercicio de la jurisdicción coactiva.

Las técnicas de recolección de información serán mediante un análisis documental de la información obtenida en fuentes secundarias, como documentos legales, así como artículos científicos que abordan el tema, la presentación de los resultados se realiza mediante el uso de la narrativa para presentar la información que posterior a análisis es presentada como conclusiones finales. Se destaca que se siguen con todos los aspectos éticos relacionados con la investigación asegurando la privacidad de a información y su uso para fines netamente académicos.

Los métodos analíticos – sintético, inductivo – deductivo, y la hermenéutica jurídica permitieron analizar la normativa aplicable al objeto de estudio, como lo es el Código Orgánico Administrativo, el Código Civil y la Jurisprudencia, determinándose que no existe una indicación expresa en la norma administrativa que refiera

a la caducidad o prescripción de la coactiva, pero, con normas supletorias del derecho privado, en conjunto a la Jurisprudencia se solventa aquel vacío jurídico, de manera que, se logra identificar cuando se permite la aplicación de la caducidad y prescripción en la coactiva, lo cual no es ejercido regularmente por desconocimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el contexto de la administración pública en Ecuador, la caducidad puede referirse a la pérdida de vigencia o validez de ciertos actos, procesos o documentos administrativos. Para entender los elementos que integran la caducidad en este ámbito, es necesario examinar la legislación pertinente. La cual manifiesta que está vinculada a plazos específicos establecidos por la ley (Moreta & Cifuentes, 2022).

La caducidad puede estar relacionada con la falta de actuación o inactividad por parte de las partes involucradas en un proceso administrativo. Es decir, en el caso que no se realizan ciertos actos dentro de un período de tiempo determinado, puede dar lugar a la caducidad. Destacando que para esto también se deben cumplir principios que garanticen que el mismo sea legal (Jiménez, 2019).

La caducidad legal consiste en la extinción de un derecho que, por su naturaleza, tiene una duración predefinida simplemente por el transcurso del tiempo establecido para su validez. La misma no requiere de un evento externo para poner fin a su existencia. Y en este caso, el tiempo actúa como la medida de la vigencia del derecho, lo que dicta que a cada plazo le corresponde un derecho específico (Villarreal, 2019).

Los principales elementos de la caducidad, son el plazo, que es establecido por las leyes, en este caso el Congreso en los artículos 33 y 34 (p.8) establecen lo siguiente:

Art. 33.-Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes, o en los decretos del Presidente de la República o de los tribunales o juzgados, se entenderá que han de ser completos; y correrán, además, hasta la media noche del último día del plazo.

El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener una misma fecha en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, y el plazo de un año de trescientos sesenta y cinco o trescientos sesenta y seis días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiarse un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corre desde alguno de los

días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.

Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y, en general, a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades ecuatorianas; salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa.

Art. 34.-Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media noche en que termina el último día de dicho espacio de tiempo. (Congreso Nacional del Ecuador, 2022)

De la norma transcrita, se puede apreciar que, los plazos determinados de la ley son imperativos y de valor trascendental para el ejercicio de los derechos. Esto con el objeto de que no exista una forma ilimitada para ejercer una acción jurídica. Además, respecto a esta identificación de los plazos para la operatividad de la caducidad o la prescripción, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 261 (p.31), establece:

Art. 261.- Titular de la potestad de ejecución coactiva y competencias. Las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. La determinación de responsabilidades derivadas del control de recursos públicos que realiza la Contraloría General del Estado se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (Congreso Nacional del Ecuador, 2015).

El ejercicio de la potestad de ejecución coactiva una vez que se ha declarado prescrito, acarrea la baja del título de crédito. La caducidad del procedimiento de ejecución coactiva acarrea la baja del título de crédito. De tal manera que, al existir una generalidad de la normativa administrativa, en cuanto a la determinación de la caducidad y prescripción, por no establecer un plazo específico dentro del ejercicio de la jurisdicción coactiva para la aplicación respectivo del derecho discutido. Indudablemente esto no podía quedar sin practicar un análisis jurídico profundizado para el ejercicio de los derechos, es así que, la Corte Suprema de Justicia emite la siguiente jurisprudencia:

RATIO DECIDENDI

1. La acción coactiva no tiene determinado expresamente un tiempo de prescripción, por lo que, por ser un proceso de ejecución, se aplica lo dispuesto en

el artículo 2415 del Código Civil (p.273), que establece un plazo de 5 años para la prescripción de las acciones ejecutivas (Congreso Nacional del Ecuador, 2022).

2. El juicio coactivo es un proceso de ejecución para cobrar obligaciones que por cualquier concepto se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento, cuyo trámite se rige por las normas específicas previstas por la sección 30ª (p.243) del Código de Procedimiento Civil y por los del trámite del juicio ejecutivo. Para hacerlo efectivo se necesitan 3 requisitos (Congreso Nacional del Ecuador, 2022):
 - a) Un título de crédito que pruebe la existencia de la obligación
 - b) La orden de cobro emitida por el empleado recaudador
 - c) La deuda debe ser líquida, determinada y de plazo vencido (Sentencia N° 0299-2007 de Ex 2ª Sala de Lo Civil y Mercantil de la Ex - Corte Suprema de Justicia, 20 de Septiembre de 2007) (Corte Suprema de Justicia de Ecuador, 2007).

Por otro lado, se consideran los requisitos o condiciones que otorgan validez al acto administrativo. También se incluye la notificación, que es el aviso a las partes involucradas. Además, otro elemento es la renovación del acto, la cual puede estar permitida por la ley en ciertas ocasiones.

Puede afirmarse que la prescripción implica la extinción de un derecho, deuda, acción o responsabilidad debido al transcurso del tiempo establecido para ello. Es decir, se convierte en el mecanismo a través del cual la pérdida de la oportunidad de hacer valer un derecho resulta de la inactividad por parte del titular (Jordá, 2019). La eficacia de este mecanismo radica en la prohibición de exigir el cumplimiento de una obligación. Debido a que esta pierde su carácter de deber jurídico y se convierte en una obligación natural, teniendo en cuenta que se manifiesta la prescripción positiva, que permite la adquisición de un derecho.

Los principales elementos que abordan la prescripción se tienen algunos que comparten con la caducidad, y se tiene el plazo, la caducidad de los derechos como tal. Es decir, el momento en el que expira el plazo establecido, así mismo se consideran las obligaciones administrativas que son impuestas por la administración pública. La estabilidad que permite el establecimiento de límites legales claros, y finalmente la protección del interés público, al evitar situaciones largas garantizando la eficiencia de la gestión (Jordá, 2019).

La vía coactiva se refiere a un proceso ejecutivo que se utiliza para hacer cumplir el pago de deudas u obligaciones

pendientes. Este proceso suele ser implementado por entidades gubernamentales, como agencias tributarias o autoridades locales. Este procedimiento se caracteriza por su carácter ejecutivo, facultando a la entidad correspondiente a utilizar medidas coercitivas con el fin de lograr la satisfacción de las obligaciones por parte de los deudores o infractores (Reyes, 2019).

Dentro del proceso de coactiva, se siguen una serie de pasos que dependiendo de las leyes, los plazos pueden variar, entre estos se destaca en primera instancia, la notificación del proceso. Es decir la institución pública en este caso, notifica al deudor sobre su deuda, las razones y montos. Aquí generalmente se incluye un plazo determinado para que se dé el pago voluntario por parte del implicado. Se destaca que en este plazo se dan en ocasiones descuentos con la finalidad de que el deudor se acerque en los tiempos establecidos a cancelar el valor, como sucede principalmente en los impuestos prediales que recolectan los GADs Municipales (Reyes, 2019).

Una vez que se vence el plazo establecido y el deudor no se acerca a la cancelación voluntaria de la deuda, inicia el proceso coactivo que viene a ser la tercera etapa o paso. Aquí, inicia formalmente el proceso coactivo, en el cual se emite un acto administrativo que ordena la ejecución de la deuda. Una cuarta etapa suele ser el avalúo de bienes del deudor, y posterior embargo, con la finalidad de que el deudor cancele los valores de la deuda. En caso de seguir haciendo caso omiso, sigue la siguiente etapa en la cual, la administración pública puede realizar un remate o subastas para lograr la cantidad de que cancele los valores adeudados. Con lo cual, una vez que se recuperan estos valores, se llega a la última etapa la cual es el cierre del proceso coactivo (Reyes, 2019).

Se destaca que los plazos varían según la jurisdicción del empleado recaudador de la institución pública con competencia para ejercer la coactiva. Así mismo, según la complejidad del proceso coactivo, y la colaboración del deudor, además de la disponibilidad de los bienes a embargar y rematar, también influye la eficiencia de la institución coactiva para cumplir con las obligaciones pendientes del caso. La vía coactiva no solo se aplica a deudas financieras, sino también a otras obligaciones legales, como multas impuestas por infracciones a normativas específicas. A lo largo de este proceso, se busca garantizar la eficacia y celeridad en la satisfacción de las obligaciones, al tiempo que se respetan los derechos y garantías legales de los involucrados (Pino, 2023).

Este mecanismo, aunque poderoso en su capacidad para hacer cumplir las obligaciones pendientes, también está sujeto a regulaciones legales precisas que buscan

equilibrar la eficiencia administrativa con la protección de los derechos individuales. Por lo tanto, desempeña un papel muy importante en la gestión y ejecución de las obligaciones legales. Proporcionando a las autoridades las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normativas y la equidad en el tratamiento de los ciudadanos (Reyes, 2019).

El artículo 2422 del Código Civil del Ecuador (p.274) (Congreso Nacional del Ecuador, 2022) establece, en términos generales, que las acciones para el cobro de servicios públicos sujetos a facturas están sujetas a caducidad, en otras palabras, se refiere específicamente a la “caducidad”, no a la “prescripción”. En el ámbito legal, la caducidad y la prescripción son conceptos distintos. Mientras que la prescripción se relaciona con la pérdida de derechos por el simple paso del tiempo, la caducidad a menudo está vinculada a plazos establecidos por la ley para realizar ciertos actos. Dado que se trata de servicios públicos, la caducidad puede tener implicaciones en términos de proteger la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de servicios públicos y garantizar una gestión eficiente.

El principio de no arbitrariedad de la administración pública constituye un pilar fundamental en el marco del derecho administrativo, estableciendo un imperativo que vela por la rectitud, justicia y legalidad en la actuación de las autoridades gubernamental, entre sus postulados se tiene que los actos y decisiones de la administración deben fundamentarse en criterios objetivos y razonables, evitando la discrecionalidad y asegurando un trato justo y equitativo para los ciudadanos.

Básicamente, la no arbitrariedad implica que la administración pública debe ceñirse a los límites establecidos por la ley. Actuando de manera coherente, imparcial y proporcional, que todos y cada uno de los actos administrativos deben estar respaldados por motivos lógicos y justificados. Garantizando transparencia y evitando la toma de decisiones arbitrarias o caprichosas que puedan afectar los derechos y los intereses de los ciudadanos (Ruiz, 2021).

Además, la no arbitrariedad encuentra su razón de ser en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la prevención de abusos de poder. Garantizando y dando la protestad a los ciudadanos de impugnar actos administrativos que se aparten de los principios de legalidad y justicia. Contribuyendo así, a mantener un equilibrio entre la autoridad del Estado, por medio de las instituciones públicas y la protección de los derechos individuales. Garantizando lo establecido en el Estado de Derecho, asegurando que las actuaciones gubernamentales se ajusten a parámetros legales y éticos, promoviendo la confianza de los ciudadanos en la legitimidad y equidad del sistema administrativo (Ordóñez & Miño, 2023).

Referente a lo planteado en el estudio, se elaboró la siguiente tabla 1 que ofrece, a modo de resumen, un análisis entre la Caducidad y la Prescripción:

Tabla 1. Análisis Comparativo de la Caducidad y la Prescripción en el Procedimiento de Ejecución de Coactiva

Aspecto	Caducidad	Prescripción
Definición	Extinción automática de un derecho o acción por el simple transcurso del tiempo establecido por la ley.	Extinción de un derecho, deuda, acción o responsabilidad debido al transcurso del tiempo y a la inactividad del titular del derecho.
Naturaleza	Actúa de manera automática.	Requiere ser alegada por la parte interesada.
Plazo	Específicamente establecido por la ley.	También está determinado por la ley, pero puede variar dependiendo del tipo de derecho o acción.
Requisitos	No requiere un evento externo; el tiempo por sí solo causa la extinción del derecho.	Requiere inactividad por parte del titular del derecho durante el plazo establecido.
Impacto en Coactiva	La caducidad del procedimiento de ejecución coactiva resulta en la baja del título de crédito.	Si no se practica la acción de cobro dentro de 5 años de haberse emitido el título de crédito, la acción prescribe.
Marco Legal	Código Orgánico Administrativo y el Código Civil.	Código Civil y jurisprudencia aplicable.
Aplicación en Ejecución Coactiva	Si no se inicia dentro del plazo determinado para la emisión del auto de pago después del requerimiento de pago voluntario, opera la caducidad.	Aplica si no se realiza la acción de cobro dentro del plazo de 5 años, según el artículo 2415 del Código Civil.
Ejemplos	Artículos 33 y 34 del Código Civil, artículo 261 del Código Orgánico Administrativo.	Artículos 2392, 2414, 2415, y 2418 del Código Civil.

Fuente: análisis de la revisión documental. Nota: elaboración propia.

La caducidad y la prescripción son mecanismos esenciales que, al influir en el procedimiento de ejecución coactiva, garantizan que la administración pública opere dentro de los límites legales, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica de los administrados.

- Ambos conceptos limitan el ejercicio arbitrario del poder administrativo y protegen los derechos de los ciudadanos, asegurando que las acciones de cobro se realicen dentro de plazos razonables.
- La aplicación de la caducidad y la prescripción en la coactiva también promueve la eficiencia administrativa y la equidad, ya que obliga a la administración a actuar diligentemente y dentro de marcos temporales definidos.

DISCUSIÓN

Los resultados de la investigación han revelado que los conceptos de caducidad, ejecución coactiva y prescripción son fundamentales para el ejercicio de las funciones de la Administración Pública. La caducidad implica la extinción automática de un derecho o acción por el simple transcurso del tiempo legalmente establecido, como lo ilustra el artículo 71 (p.24) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que fija un plazo de siete años para evaluar actividades estatales y un año para resolver recursos de revisión de resoluciones (Congreso Nacional del Ecuador, 2015).

La ejecución coactiva es un procedimiento administrativo que permite a la Administración Pública cobrar obligaciones pecuniarias sin intervención judicial previa, mediante la notificación de una resolución de ejecución coactiva al deudor. Si el deudor no cumple con el pago, la Administración puede disponer medidas cautelares sobre sus bienes y proceder al remate para satisfacer la deuda. Este procedimiento está sujeto a límites y garantías legales para proteger los derechos de los administrados (Reyes, 2019).

El principio de no arbitrariedad es esencial para el accionar de la Administración Pública, asegurando que sus actuaciones sean motivadas, razonables y proporcionales, respetando los derechos y garantías de los ciudadanos. El Código Orgánico Administrativo refuerza este principio, estableciendo que las decisiones administrativas deben seguir los principios de juridicidad e igualdad y evitar interpretaciones arbitrarias (Asamblea Nacional del Ecuador, 2022).

La prescripción, como señala la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia en el Juicio No. 17811-2018-00108, es una forma de extinguir acciones y derechos ajenos por falta de ejercicio durante un tiempo determinado. El artículo 2415 (p.

273) del Código Civil establece que las acciones deben ejercerse en un plazo no mayor a 10 años. Requerimientos administrativos sin reconocimiento procesal de la obligación no interrumpen la prescripción, y la citación con un auto de pago no suspende la prescripción si el crédito ya ha prescrito (Congreso Nacional del Ecuador, 2022).

El presente estudio subraya la importancia de la caducidad y la prescripción para limitar el ejercicio arbitrario del poder administrativo, protegiendo así la seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos. La aplicación adecuada de estos conceptos es crucial para la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, evitando la perpetuidad de las obligaciones y garantizando un debido proceso.

CONCLUSIONES

El estudio subraya la importancia de la caducidad, la prescripción y la ejecución coactiva para garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos de los ciudadanos. La caducidad opera automáticamente, brindando certeza y evitando procedimientos perpetuos. La prescripción requiere plazos claros para asegurar la legalidad y evitar obligaciones indefinidas. La ejecución coactiva se demuestra eficaz para que la Administración Pública recaude deudas económicas.

La Administración Pública desempeña un rol fundamental en la organización y funcionamiento del Estado, al ser la encargada de ejecutar y hacer cumplir las leyes y políticas públicas, así como de prestar los servicios y satisfacer las necesidades de interés general de la población, además, su accionar debe enmarcarse dentro de los principios y límites establecidos por el ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y la consolidación del Estado de Derecho.

Es fundamental que la Administración Pública ejerza sus facultades y competencias de manera responsable y ajustada a la legalidad, respetando los principios y garantías que rigen su actuación, en este sentido, es necesario que se adopten medidas para fortalecer la capacitación y formación de los funcionarios públicos en materia de caducidad, ejecución coactiva, prescripción y principio de no arbitrariedad, además, se requiere una revisión integral de la normativa vigente en estas materias, con el objetivo de armonizar y unificar los plazos y procedimientos aplicables, eliminando posibles contradicciones o vacíos legales que puedan generar inseguridad jurídica o situaciones de arbitrariedad.

El principio de legalidad dentro de la Administración Pública establece que todas sus actuaciones deben ser conforme a la ley y por ende, respetar las competencias y

atribuciones que le confiere el sistema normativo. Lo que implica que la Administración Pública debe actuar dentro del marco legal y siguiendo los procedimientos establecidos, de esta manera garantiza el Estado de Derechos y los derechos de los ciudadanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2022). *Código Orgánico Administrativo COA*. Registro Oficial 623, 21-01-2022. <https://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3362>
- Congreso Nacional del Ecuador. (2015). *Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado . Capítulo VI. Caducidad y Prescripción. Ley 73*. Registro Oficial Suplemento 595. https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_23_ley_org_cge.pdf
- Congreso Nacional del Ecuador. (2022). *Código Civil*. Registro Oficial 15. <https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/3410/1/C%C3%B3digo%20Civil%20%28%C3%9Altima%20reforma%2014-03-2022%29.pdf>
- Corte Suprema de Justicia de Ecuador. (2007). Sentencia n° 0299-2007 de Ex 2ª Sala de Lo Civil y Mercantil de la Ex - Corte Suprema de Justicia, 20 de Septiembre de 2007. <https://vlex.ec/vid/412506502>
- Flores, M. D., Franco, M. E. V. E., Ricalde, D. C., Garduño, A. A. L., & Apáez, M. R. (2013). Metodología de la investigación. Editorial Trillas, SA de CV. https://etrillas.mx/libro/metodologia-de-la-investigacion_10548
- Jiménez, R. (2019). Apuntes sobre la caducidad y la seguridad jurídica. Forseti. *Revista de derecho*, 7(10), 42-54. <https://pr-ojsv3-pub.up.edu.pe/index.php/forseti/article/view/1098>
- Jordá, I. P. (2019). Elementos de la prescripción de la infracción tributaria. *Revista de Derecho UNED*(24), 231-279. <https://www.proquest.com/openview/de9226844c0eea8cb99dace4948d8029/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1596356>
- Mejía, M. L. (2023). Herramientas jurídicas y administrativas disponibles para evitar la caducidad de la acción de cobro y la prescripción de las obligaciones del IPU. El caso del municipio de Pereira, Colombia. *Revista de derecho fiscal*, (23), 131-170. <https://www.redalyc.org/journal/6843/684375932007/684375932007.pdf>
- Moreta Neira, A. S., & Cifuentes, C. (2022). Interrupción del plazo de caducidad de la acción subjetiva por interposición de una acción de protección en Ecuador. Estado & comunes, *Revista de políticas y problemas públicos*, 1(14), 17-35. <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/ecomunes/v1n14/2477-9245-ecomunes-1-14-00017.pdf>
- Ordóñez, I. M. P., & Miño, M. D. (2023). Equidad o arbitrariedad: análisis de las compensaciones por daños otorgadas por la Corte Constitucional del Ecuador. *USFQ Law Review*, 10(2). <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/3029/3493>
- Pino, G. (2023). Seguridad jurídica. EUNOMÍA. *Revista en Cultura de la Legalidad*, (25), 262-284. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/8000>
- Reyes Garzón, M. Á. (2019). El debido proceso en el procedimiento de ejecución coactiva [Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/ac280c5a-5ec0-4513-b65d-de6b617d592c/content>
- Ruiz Robledo, A. (2021). La arbitrariedad del poder: la palabra y la idea en la historia constitucional. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, (43), 723-747. <https://www.scielo.cl/pdf/rehj/n43/0716-5455-rehj-43-723.pdf>
- Villarreal, O. L. (2019). PARA UNA RECEPCIÓN CRÍTICA DE LA CADUCIDAD. *Revista Chilena de Derecho Privado*(4). <https://rchdp.udp.cl/index.php/rchdp/article/view/358/342>